

Señor (a),
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI (reparto)
E. S. D.

Ref.:	Escrito de demanda
Medio de control:	Reparación directa
Demandantes:	Janet Viviana Ruiz Gómez, Claudia Patricia Ruiz Gómez Oscar Gehovani Gómez Sánchez Y Mauricio Gómez Sánchez. consuljuridicoscali@outlook.com jorge.caicedo.riascos@gmail.com
Demandadas:	Distrito Especial de Santiago de Cali -Secretarías de Infraestructura y Movilidad Distritales- notificacionesjudiciales@cali.gov.co Empresas Municipales de Cali -EMCALI- E.I.C.E. E.S.P. notificaciones@emcali.com.co notificacion@emcali.co notificaciones@emcali.com.co

JORGE ENRIQUE CAICEDO RIASCOS, mayor de edad, vecino de Cali, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio con T.P. No. 253.216 del C.S. de la J., obrando en nombre y representación de los señores, JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, CLAUDIA PATRICIA RUIZ GÓMEZ, OSCAR GEHOVANI GÓMEZ SÁNCHEZ y MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ, mayores de edad, vecinos del municipio de Cali (Valle del Cauca), según poder adjunto, respetuosamente me sirvo presentar ante su H. Despacho medio de control de Reparación Directa, en contra de las entidades **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** y **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** personas jurídicas de derecho público, con capacidad para actuar, autonomía administrativa, patrimonial y financiera, representadas respectiva y legalmente por su Alcalde Municipal y Gerente General, o por quiénes lo sean o hagan sus veces en el momento de la notificación del auto admisorio de la presente demanda, a fin de que, previos los trámites procesales previstos para el proceso de Reparación Directa de que trata el artículo 140 del C.P.A.C.A., se provea favorablemente sobre las pretensiones que más adelante expondré.

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

- 1.1. Parte demandante:** Está compuesta por,
 - 1.1.1.** La señora JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, (afectada directa) identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.925.845 expedida en Armenia (Quindío).
 - 1.1.2.** La señora CLAUDIA PATRICIA RUIZ GÓMEZ, (hermana de la afectada directa) identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.928.308 expedida en Armenia (Quindío).
 - 1.1.3.** El señor OSCAR GEHOVANI GÓMEZ SÁNCHEZ, (hermano de la afectada directa) identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.398.818 expedida en Calarcá (Quindío).
 - 1.1.4.** El señor MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ, (hermano de la afectada directa) identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.113.622.605 expedida en Palmira (Valle del Cauca).

1.2. Apoderado parte demandante:

- 1.2.1.** El suscrito JORGE ENRIQUE CAICEDO RIASCOS, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, Abogado Titulado con Tarjeta Profesional No. 253.216 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

1.3. Parte demandada: Está compuesta por,

- 1.3.1.** EL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, entidad pública representada legalmente por su alcalde el señor ALEJANDRO EDER GARCÉS o quien haga sus veces.
- 1.3.2.** Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P., entidad pública representada legalmente por su gerente general el señor ROGER MINA o quien haga sus veces.

2. HECHOS Y OMISIONES

- 2.1.** Que el día 19 de noviembre del año 2022, aproximadamente a las 10:30 de la mañana a la altura de la calle 70 con carrera 1ª de esta ciudad, mi representada la señora JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ se precipitó de su motocicleta de marca Suzuki, Cilindrada 125, de placas IHM 87B, a causa de un foramen que se encontraba al lado derecho de la vía de tres carriles, adyacente a una ventanilla de alcantarilla pública¹ situado una distancia no mayor de 1 metro de la línea de demarcación horizontal sobre dicha vía, causándole traumatismos múltiples en su humanidad, particularmente a nivel craneoencefálico, comprometiendo su visión (ojo derecho) con trauma vestibular, facial y pérdida de pizas dentales, cervical superior con hiperextensión de columna, trauma cerrado de tórax, trauma abdominal, trauma de extremidades a nivel de muñecas, manos y pies, con escoriaciones de piel de tipo urgente con dolor de 9/10, e incapacidad médico legal de 85 días.
- 2.2.** Que la vía en el sitio del accidente, carecía de señales de tránsito que advirtiera a los conductores sobre el inminente peligro que se aproximaba, omitiendo con ello las entidades EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI su obligación legal, tal y como fue consignado por el agente de tránsito PADILLA identificado con placa 371 quien elaboró el informe de tránsito No. A001522899.
- 2.3.** Que la gravedad de las lesiones padecidas hasta la fecha generan en la afecta directa dolor y molestias en su humanidad, lo que ha impactado de forma negativa su ámbito personal y familiar generando gran tristeza y desesperación; lo anterior, pues conforme el dictamen pericial de Clínica Forense No. UBCALCA-DSVA-02930-2023, emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, se estableció que aquella padece una deformidad física que afecta su rostro, además de una perturbación funcional en su órgano de la visión, pues quedó con una desviación ocular con parálisis del ojo derecho conforme el formato de evolución clínico.

3. PRETENSIONES

- 3.1.** Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, y a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por los perjuicios causados a la señora JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, como consecuencia de la

¹ Tal y como lo indica el bosquejo topográfico del informe policial de accidentes de tránsito.

falla en el servicio, por la negligencia constituida en la omisión del mantenimiento, conservación y señalización de la vía pública, lo que generó en la asociada, múltiples traumatismos en su humanidad.

- 3.2.** Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes los perjuicios de orden material e inmaterial que se determinan y discriminan de la siguiente manera:

3.2.1. A título de perjuicios materiales

- 3.2.1.1. Daño emergente:** Se solicita para la directamente afectada JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CUATROCIENTOS DE PESOS (\$4.938.400,00 M/Cte)., que corresponden a los gastos médicos en los que tuvo que incurrir la lesionada, así como las erogaciones por concepto de transporte privado.

- 3.2.1.2. Lucro cesante consolidado:** Se solicita para la directamente afectada JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, las sumas de dinero que resulten de lo dejado de percibir **hasta la fecha de la sentencia**, lo anterior, liquidado en correspondencia a la pérdida de capacidad laboral conforme la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

Lo anterior se justifica en la medida en que, para la fecha de los hechos la señora JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, era una persona económicamente productiva pues trabajaba para CREPES Y WAFLES, y como consecuencia de las lesiones perdió un porcentaje (no definido) de la capacidad laboral, situación que en la misma proporción afectará su nivel de ingresos por lo que resta de su vida a partir de la ocurrencia del hecho.

Respecto del ingreso base para llevar a cabo esta liquidación, se deberá tomar lo definido por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, esto es el salario mínimo legal mensual vigente al momento en que el perjuicio se hizo evidente, aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. En consecuencia, la renta a actualizar será la correspondiente al salario mínimo mensual vigente en el año 2022 (fecha de los hechos), utilizando la siguiente fórmula a saber:

- Actualización de la renta:

$$Ra = Rh \frac{Ipc(f)}{Ipc(i)}$$

Así, una vez obtenida la renta actualizada, se deberá proceder a efectuar el cálculo del lucro cesante consolidado en la cual se deberá tener en cuenta el número de meses transcurridos desde el momento en que el perjuicio se hizo evidente (19 de noviembre del año 2022) hasta la fecha de la sentencia, aplicando la siguiente fórmula:

- Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica:

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Lucro cesante futuro: Se solicita para la directamente afectada JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, las sumas de dinero que resulten de lo dejado de percibir, **desde la fecha de la sentencia**, hasta la esperanza de vida; lo anterior, liquidado en correspondencia a la pérdida de capacidad laboral conforme la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

En este caso, a efectos de llevar a cabo la liquidación debida, se deberá tener en cuenta, los meses transcurridos desde la fecha de la sentencia hasta la esperanza de vida ($e^{\circ}x$) probable de la lesionada JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ, lo anterior, teniendo en cuenta la tabla de mortalidad que para tal efecto ha establecido la Superintendencia Bancaria mediante Resolución Número 0497 de 1997 utilizada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en este tipo de perjuicios, y conforme la siguiente fórmula:

- **Cálculo de la indemnización futura o anticipada:**

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 +$$

3.2.2. A título de perjuicios inmateriales:

3.2.2.1. Perjuicio moral: Se solicita el equivalente en pesos para cada uno de los actores JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, CLAUDIA PATRICIA RUIZ GÓMEZ, OSCAR GEHOVANI GÓMEZ SÁNCHEZ y MAURICIO GÓMEZ SÁNCHEZ, respectivamente la suma de CIENTO (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.2.2.2. Daño a la salud o perjuicio fisiológico: Solicita el equivalente en pesos para la directamente afectada JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, la suma de CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta las tablas de liquidación diseñadas por la Sección tercera, Subsección "C" del Consejo de Estado, particularmente, la establecida en sentencia del 24 de julio de 2013, M.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Expediente 52001-23-31-000-1999-00782-01(27155), en la cual se determinó los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a sus contenidos objetivo (estático) y subjetivo (dinámico); Sin perjuicio de la aplicación de las fórmulas definidas en sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2003-00693-01 (34671), M.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO, donde se expuso que la tasación del daño a la Salud no se debía limitar a la constatación de una pérdida de capacidad laboral, puesto que también era procedente valorar las consecuencias derivadas por la misma enfermedad.

3.3. Que sobre las sumas ordenadas como indemnización se paguen los intereses señalados en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

3.4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A. siguiendo los lineamientos del Acuerdo 1887 de 2003 del C.S. de la J. y los artículos 365 y 366 del C.G.P.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

Jurisprudencialmente se ha establecido que, en casos en los que se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, el título jurídico de imputación es el de la falla en el servicio; que para efecto de determinar si el daño causado tiene el carácter de antijurídico, se debe acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada.

Ha sostenido el Consejo de Estado, que para que la falla de la administración, pueda considerarse como causa del perjuicio, ésta debe ser del tal magnitud que teniendo en cuenta las circunstancias concretas en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente".

Que para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, deben reunirse dos elementos: primero **la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa, la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente;** y, en segundo lugar, **la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño.**

De esa forma, se ha pronunciado dicha Corporación en pronunciamientos como la sentencia del 29 de agosto de 2007, expediente 15526, con ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez, en la cual se sostuvo lo siguiente:

“Según lo advirtió la Sala en reciente pronunciamiento², la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído —en los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del supuesto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo—, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto. En este sentido, se ha sostenido que la “...responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.”

Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., sólo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal

concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la sala en sentencia del 5 de agosto de

1.994 (exp. 8487, actor VICTOR JULIO PARDO, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

...

2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente".

“No se trata entonces de determinar si el Estado tiene o no recursos para cubrir condenas, como lo afirma el recurrente. Se trata de establecer si, teniendo en cuenta la realidad concreta

² CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del ocho (8) de marzo de dos mil siete (2.007); Radicación No.: 250002326000200002359 01; Expediente No. 27.434.

en la cual se presta un determinado servicio, puede considerarse que dicho servicio fue inadecuadamente prestado y dicha circunstancia así puede considerarse como la causa del daño sufrido por el demandante³...”

La falla en el servicio, se deriva del incumplimiento de una obligación Estatal, que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración. Así pues, los elementos que se deben probar, para la estructuración de dicho título de imputación, son los siguientes:

- 1) Un hecho que puede consistir en la omisión, retardo, irregularidad o deficiencia del servicio, por la acción u omisión de las autoridades públicas.
- 2) Un daño antijurídico que implique perturbación o lesión de un bien protegido que sea susceptible de ser reparado y
- 3) El nexo causal, consistente en la relación necesaria y eficiente que debe existir entre la conducta imputable a la administración y el daño causado. Dicha acción u omisión debe ser determinante en la producción del daño, por lo tanto, sin este último no puede atribuirse a la actuación reclamada a la administración, no habrá responsabilidad de ésta.

En este caso, la demanda se formula por los daños producidos tras la ocurrencia de un accidente de tránsito como consecuencia de la existencia de una oquedad sobre la calle 70 con carrera 1ª de esta ciudad, pues la directamente afectada señora JANETH VIVIANA RUIZ GÓMEZ al transitar en su motocicleta por dicha vía, perdió el control de la misma, lo que derivó al trauma a nivel craneoencefálico, comprometiendo su visión (ojo derecho) con trauma vestibular, facial y pérdida de pizas dentales, cervical superior con hiperextensión de columna, trauma cerrado de tórax, trauma abdominal, trauma de extremidades a nivel de muñecas, manos y pies, con escoriaciones de piel de tipo urgente con dolor de 9/10, e incapacidad médico legal de 85 días.

Para el análisis del presente caso, se deberá aplicar la teoría de responsabilidad por falla en el servicio, la que según lo ha determinado la jurisprudencia, no es más que la violación del contenido obligacional a cargo del Estado.

En efecto, el Consejo de Estado ha sostenido que en los casos de daños producidos por falta de mantenimiento en las vías, el título de imputación no es otro que el de la falla en el servicio por omisión, por lo que se debe acreditar en este caso que la entidad demandada no cumplió con **el deber de conservar en óptimas condiciones la vía y que el accidente de tránsito ocurrió como consecuencia de la falta de mantenimiento y conservación de la misma.**

De esa forma se pronunció en Sentencia de fecha Tres (3) de Febrero de Dos Mil Diez (2010), Radicación número: 76001-23-31-000-1996-02365-01(17644), Actor: DIONALDO DE JESÚS ALONSO, Demandado: MUNICIPIO DE CALI-SECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL Y VÍAS RURALES, Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, en la que se sostuvo lo siguiente:

"(...) Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado, como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido o lo ha hecho

³ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre once de mil novecientos noventa y siete; Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo; Radicación número: 11764; Actor: Olimpo Arias Cedeño y otros; Demandado: La Nación- Ministerio De Obras, Intra y Distrito Especial de Bogotá.

de forma deficiente o defectuosa al referido contenido obligatorio, esto es, se ha apartado por omisión del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligatorio impuesto normativamente a la Administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro.

Para la Sala, no hay duda que el hecho generador del daño es imputable a la demandada, por cuanto a esa entidad le correspondía el mantenimiento y señalización de la autopista Simón Bolívar, de tal suerte que cualquier accidente que se produjera en esa vía, por daños en ella, le resulta imputable a menos que demostrara que se produjo por fuerza mayor, por el hecho exclusivo de un tercero, o por la culpa también exclusiva de la propia víctima.”

5. COMPETENCIA

- 5.1.** Es usted el competente señor (a) Juez de lo Contencioso Administrativo, para tramitar el presente medio de control de Reparación Directa, de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en atención al factor territorial y factor objetivo de la competencia (cuantía y naturaleza del asunto), conforme a los artículos 155, 156 y 157 de la Ley 1437 de 2011.

6. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

- 6.1.** Como quiera que los perjuicios morales no son los únicos que se reclaman en el presente medio, la cuantía *-en términos del inciso 3° del artículo 157 del C.P.A.C.A.-* se determinará con base en la pretensión mayor acumulada que corresponde al perjuicio material denominado “*Daño emergente*”, en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$4.938.400,00 M/Cte)).

7. OPORTUNIDAD Y CADUCIDAD

- 7.1.** En los términos del artículo 161 se agota el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las fechas 10 de agosto de 2023 (DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI) y 15 de diciembre del año 2023 (EMCALI), a fin de interrumpir el término de la caducidad de la acción de DOS (2) AÑOS, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño que, como puede observarse, se concretó el día 19 de noviembre del año 2022, por lo tanto la demanda se presenta dentro del término legal correspondiente.

8. ANEXOS

- 8.1.** Poder especial que me han conferido los demandantes (Archivo digital No. 002)
- 8.2.** Constancias de agotamiento de la conciliación prejudicial. (Archivos digitales Nos. 014 y 015)
- 8.3.** Constancia de envío electrónico de la demanda y de sus anexos a las partes que al radicar esta demanda se efectúa; lo anterior con fundamento en el artículo 162 numeral 8 *idem* adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, la cual, deberá ser remitida a usted señor Juez por la Oficina de apoyo y/o reparto de los Juzgados Administrativos, al momento de la asignación del reparto del presente proceso.

9. PRUEBAS APORTADAS

- 9.1. Historial clínica de la lesionada. (Archivos digitales Nos. 003 a 005)
- 9.2. Documentos de identificación de los demandantes. (Archivo digital No. 006)
- 9.3. Informe policial de accidente de tránsito de la lesionada. (Archivo digital No. 007)
- 9.4. Informe pericial de clínica forense de la lesionada. (Archivo digital No. 008)
- 9.5. Documental fotográfico de la lesionada. (Archivo digital No. 009)
- 9.6. Registros civiles de nacimiento de los convocantes. (Archivo digital No. 010)
- 9.7. Certificado laboral de la lesionada. (Archivo digital No. 011)
- 9.8. Constancias de erogaciones económicas. (Archivos digitales Nos. 012 y 013)

10. PRUEBAS SOLICITADAS

10.1. Periciales:

- 10.1.1. Solicito se practique y lleve a cabo una prueba pericial tendiente a obtener: El reconocimiento médico que determine la **pérdida de capacidad laboral** de la señora JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, derivada de las perturbaciones generadas con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el día 19 de noviembre del año 2022.

En consecuencia, solicito se ordene que, con la totalidad las enmiendas clínicas, por secretaría se remita los insertos del caso a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, para que esa entidad fije fecha de valoración y se pronuncie frente a ello.

Solicito se ordene que una vez rendido el dictamen y obtenida la experticia, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA la allegue al Despacho con copia también al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., para que en esa medida el traslado respectivo corra a las partes por el término de TRES (03) DÍAS, término dentro del cual puedan solicitar la aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo a costa de la parte interesada, mediante solicitud debidamente motivada, precisando los errores que estime presentes en el dictamen; lo anterior, sin perjuicio de que el Despacho provea según lo establecido en el parágrafo único del artículo 219 modificado por el artículo 55 de la Ley 2080 de 2021 y/o artículo 231 del C.G.P., de manera que se pueda prescindir de su sustentación en audiencia a efectos de imprimir mayor celeridad y economía procesal.

10.2. De oficio:

- 10.2.1. En caso de que el Señor (a) Juez lo considere necesario, se decrete y solicite copia íntegra y completa de las historias clínicas aportadas con la demanda.
- 10.2.2. En caso de que el señor Juez lo considere necesario, se decrete y practique - *conforme los términos del artículo 198 y 203 del C.G.P.*- interrogatorio de parte de la señora JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ, a fin de que absuelva el interrogatorio que en su oportunidad se le deberá formular, versando sobre los hechos contenidos en la demanda.

11. PROCEDIMIENTO

- 11.1.** A la presente demanda, se dará el trámite señalado en el artículo 179 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.).

12. NOTIFICACIONES

- 12.1.** A la accionada DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Santiago de Cali, o en la dirección electrónica: notificacionesjudiciales@cali.gov.co
- 12.2.** A la accionada EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte entre calles 10 y 11 Torre EMCALI del Municipio de Santiago de Cali, o en la dirección electrónica:
notificaciones@emcali.com.co
notificacion@emcali.co
notificaciones@emcali.com.co
- 12.3.** Al suscrito abogado, en la secretaria de su despacho, o en mi domicilio la Carrera 4 #10-44 Of 1012 Edificio Plaza Caicedo, Santiago de Cali. Teléfono 889 3013 – 3128300577, o en los correos electrónicos: consuljuridicoscali@outlook.com; jorge.caicedo.riascos@gmail.com

Del (a) señor (a) Juez,



JORGE ENRIQUE CAICEDO RIASCOS

CC No. 94.070.105 de Cali – Valle.

T.P. 253.216 del C.S. de la J.